

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

Medellín, catorce (14) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Exp. 013-2019-0536-03

Cumplido el traslado de que trata el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, procede la Sala Cuarta de Decisión Laboral, a resolver el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de VICENTE DE JESÚS GUTIÉRREZ CUESTA frente al auto que aprobó la liquidación de costas, dentro del proceso ordinario laboral que adelantó en contra del PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES LIQUIDADO.

ANTECEDENTES:

En sentencia proferida el 13 de julio de 2021 la juez de primera instancia, atendiendo el contexto de la litis, CONDENÓ al PAR ISS a pagar al demandante la suma de \$4.305.022 por concepto de prima de navidad por el período del 09 de septiembre de 2013 al 31 de marzo de 2015 de manera indexada. ABSOLVIÓ a la demandada de las demás pretensiones e impuso las costas a cargo de la convocada, fijando las agencias en derecho en la suma de \$300.000.

Esta decisión, se modificó en segunda instancia, en cuanto al monto de la prima de navidad reconocida, la que se determinó en la suma de \$3.668.028 oportunidad en la que esta sala de decisión se abstuvo de imponer costas procesales por la forma en que fueron desatadas las alzas.

Con estos referentes se aprobó la liquidación de costas por auto del 15 de septiembre de 2022 (Archivo 36 Expediente Digital), decisión frente a la cual la mandataria judicial del actor expresó su inconformidad, interponiendo recurso de

apelación, concedido por auto del 04 de octubre de 2022, siendo esta la razón por la cual conoce esta Sala de Decisión Laboral.

La recurrente busca, frente a la suma que se señaló a favor del demandante, que su monto se incremente teniendo bajo consideración los gastos generales que implica estructurar un proceso para poderlo presentar de manera clara, además de los recursos interpuestos en las instancias para sacar adelante las pretensiones, pues encuentra irrisoria la tasación si se observa la forma valorativa, por desconocerse la manera como se desarrolló el proceso y la actuación de la apoderada conforme lo ordena el Código General del Proceso (Archivo 38 Expediente Digital).

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

CONSIDERACIONES:

De cara a los antecedentes, el problema jurídico en esta ocasión se circunscribe a determinar si es plausible o no aumentar el monto de las agencias en derecho, incluidas en el auto que aprobó la liquidación de costas.

Pues bien, por sabido se tiene que, para la estimación de las agencias en derecho, debe acudir a las tarifas fijadas por los Acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura, pues a estos remite el numeral 4º del artículo 365 del CGP, aplicable a estos ritos por lo previsto en el 145 del CPTSS; dicha disposición que regula los parámetros para la liquidación concentrada de costas, señala que si en los referidos acuerdos se establece un mínimo, o éste y un máximo, para la movilidad entre uno u otro límite, *el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas.*

El Acuerdo que aplica a este proceso es el PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, mismo que en su artículo 5º regula la tarifa de las agencias en derecho de

primera instancia para los procesos de mayor cuantía, entre el 3% y el 7.5% de lo pedido, sin que en ningún caso se puedan desconocer los referidos límites.

Vistas así las cosas, la Sala encuentra infundados los argumentos de la apelación, ya que basta poner de relieve el quantum de las condenas emitidas en este trámite, para advertir que las agencias en derecho fijadas están definidas dentro de los rangos dispuestos por el Acuerdo expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, encontrando que los \$256.000 tasados en favor del promotor de la acción corresponden al 6.97% de lo condenado, lo que respeta las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura, y se inclina por el tope máximo permitido, no siendo de recibo en esos términos, que el valor se modifique con un incremento, con la valiosa precisión referida a que si bien las agencias en derecho corresponden a una contraprestación por los gastos en que se incurre para ejercer la defensa legal de los intereses dentro del trámite judicial, no le es imperativo a los falladores sujetarse el tope máximo definido, pero si acogerse a las tarifas dentro de los rangos que se estipulan en el Acuerdo mediante una ponderación, que son los orientadores del juez para que éste haciendo un ejercicio discrecional ponderativo, fije un monto que considere equitativo, razonable, prudente y proporcional con el valor de la condena, justipreciando la duración y calidad de la gestión profesional realizada en el transcurso del proceso.

De ese modo, precisamente atendiendo los criterios de duración y naturaleza del proceso en coherencia con lo condenado se vislumbra atinado el valor impuesto, en tanto se trató de un trámite meramente documental, donde para el otorgamiento de lo condenado solo se hizo justa la aplicación de la normativa vigente que regula el tema, sin que se estuviera en frente de un asunto en el que la apoderada debiera asumir un esfuerzo jurídico mayor, cuya duración en la primera instancia no excedió el año, etapas en las que la apoderada tuvo la intervención necesaria para promover la acción judicial, agotar las audiencias de los artículos 77 y 80 del CPTSS con presentación de alegatos y el recurso de alzada que no prosperó, circunstancias que revelan que los valores señalados se encuentran dentro del marco establecido por la normativa en cita, con coherencia y proporcionalidad a lo debatido y condenado, debiendo destacarse que si las pretensiones pecuniarias logradas ascienden a \$3.668.028 mal pudiera imponerse un valor en las costas con desproporción a esa cifra con alejamiento

de los mínimos y máximos, lo que precisamente tiende a regular el Acuerdo ya citado, luego, se considera razonable que las costas impuestas se mantengan.


En consecuencia, conforme a estas breves pero precisas consideraciones y sin lugar a otras argumentaciones, se confirmará el auto recurrido.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral, **CONFIRMA** el auto objeto de apelación, de fecha y procedencia conocidas.

La presente decisión se notifica en los ESTADOS ELECTRÓNICOS.

Los Magistrados,



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



NANCY GUTIERREZ SALAZAR

Se certifica: Que la sentencia anterior fue notificada por ESTADOS N° 226 fijados el 15 de diciembre de 2022, en la página web de la rama judicial a las 8 a.m.

El secretario.